

UNIDAD NACIONAL DE LOS TRABAJADORES SALVADOREÑOS

1. Antecedentes

La injusticia económica, social y política que por largos años hemos vivido en El Salvador, generó en la década de los 70 un acelerado crecimiento en la organización de carácter popular encaminada a luchar por la solución de dicha crisis y a mejorar las condiciones de vida de los salvadoreños. En el marco del fortalecimiento de la lucha popular en el período 1975-1979, el 15 de octubre de 1979 se dio un golpe de Estado, después del cual la Fuerza Armada lanzó su proclama en la que planteó el cambio de las estructuras económicas-políticas injustas por estructuras en las cuales se diera un mejoramiento en las condiciones de vida de los salvadoreños. Así, se instauró la primera junta de gobierno, que al no tener la suficiente capacidad para resolver la crisis existente, se desintegró en enero de 1980 y dio origen a la instauración de una segunda junta de gobierno constituida a través de un pacto entre la Fuerza Armada y el Partido Demócrata Cristiano. Esta segunda junta, con el objeto de salir adelante, llevó a cabo un programa de reformas económicas en el campo agropecuario, bancario y del comercio exterior, sin embargo, a esas alturas la crisis del país era tan profunda que estas reformas no generaron el impacto deseado.

No se puede negar que, mientras la primera y segunda juntas de gobierno hacían esfuerzos por evitar un mayor agravamiento de la crisis, las

organizaciones de izquierda se fortalecían política y militarmente y mantenían una vida activa en su lucha revolucionaria. En este marco y bajo un estado de sitio permanente se dieron elecciones para la asamblea constituyente en 1982 y luego las elecciones presidenciales en 1984, las cuales fueron “ganadas” por el Partido Demócrata Cristiano con José Napoleón Duarte como presidente, quien hizo una serie de ofrecimientos y se comprometió a tomar medidas concretas para resolver la problemática económica, social y política de la población salvadoreña, adquiriendo incluso, compromisos formales con la Unidad Popular Democrática, a través del pacto social, el cual no ha cumplido.

A 2 años de haber asumido la presidencia de la república el Ing. José Napoleón Duarte, la situación económica, política y social del país se ha empeorado ya que la crisis nacional se ha profundizado con el agravante de que ya no es el gobierno salvadoreño el que decide nuestro destino, sino el de Estados Unidos, lo que es totalmente contradictorio con la autonomía y el no alineamiento que ha pregonado siempre la democracia cristiana.

2. Situación de El Salvador después de 6 años de guerra

Al cumplirse el 1 de junio de 1986 dos años de gobierno del Ing. José Napoleón Duarte y su

Partido Demócrata Cristiano, la situación de El Salvador se ha visto seriamente agravada en todos sus aspectos. En estos dos años las promesas de humanización, pacificación, democratización, participación y reactivación económica no ha sido más que propaganda para engañar al pueblo salvadoreño y a los gobiernos democráticos del mundo.

Haciendo un ligero análisis de cada una de esas promesas nos damos cuenta que sólo han sido un engaño. Veamos.

Si como humanización entendemos que la población viva en condiciones humanamente justas, que se le respeten sus derechos, que no sea perseguida, maltratada, encarcelada o amedrentada, podemos afirmar que la promesa que hizo el presidente Duarte no ha tenido ningún efecto positivo ya que, en la actualidad, la población continúa viviendo una situación de zozobra y condiciones inhumanas, pues la persecución, el mal tratado y el encarcelamiento continúan; aparte de que en muchas zonas rurales cada vez son más intensos los bombardeos que afectan terriblemente a la población civil indefensa. En tal sentido la promesa de humanización de Duarte, se ha convertido en una política de deshumanización, pues vivimos un total irrespeto a los derechos fundamentales de la persona humana.

La paz es el más caro anhelo del pueblo salvadoreño. El Ing. Duarte se comprometió a dar prioridad a la búsqueda a través del diálogo con los insurgentes.

Sin embargo, una vez alcanzado el poder, sólo ha realizado mínimos intentos que no han llegado a producir resultados positivos, tal es el caso de los dos encuentros con el FMLN-FDR, donde se tomaron acuerdos que fueron posteriormente irrespetados, poniendo una serie de obstáculos para no continuar el diálogo. Lo peor del caso es que el presidente Duarte está totalmente definido en favor de la política bélica del gobierno de Estados Unidos, sirviendo de fachada para el impulso de una guerra que los salvadoreños no queremos y que Duarte se empeña en mantener únicamente por su ambición de ser el presidente de El Salvador, aunque ello signifique la destrucción de nuestra sociedad, nuestra economía y nuestra infraestructura, obligando al pueblo a pagar además, gran parte de los costos de la guerra por medio del paquete económico, con el agravante que cada día está comprometiéndose más y más a nuestro país con la admi-

nistración norteamericana, adquiriendo a la vez una deuda externa que convierte a nuestra patria en colonia de Estados Unidos.

El Ing. Duarte prometió instaurar "un sistema democrático," donde las grandes mayorías pudiesen expresar libremente sus inquietudes y demandas, las cuales serían escuchadas y resueltas. ¿Qué ha hecho en sus dos años de gobierno? Ha tratado de engañar a los gobiernos democráticos del mundo, afirmando en sus discursos que su gobierno es democrático y pluralista, lo cual es contradictorio con su práctica de confrontación sistemática con todos aquellos sectores que no comparten sus actuaciones y políticas. Ha emitido decretos y leyes en contra de los trabajadores y del pueblo como el decreto 162, la aplicación del decreto 296, 50, 155, etc.; ha mantenido la persecución de muchas personas por el simple hecho de no apoyar sus políticas de gobierno se mantienen encorralados más de 500 salvadoreños, acusados de subversión, sobre la base de declaraciones extra-judiciales, obtenidas a fuerza de torturas físicas y psicológicas. Ha impuesto una ley que coarta la libre expresión del pensamiento. Ignora totalmente los clamores de los diferentes sectores de la población que piden solución a sus problemas. No ha aclarado el paradero de miles de salvadoreños desaparecidos, ni se ha castigado a los responsables. Se continúa incrementando el número de desplazados y refugiados como producto de la profundización de la guerra. Se mantiene una permanente campaña propagandística, mediante la cual se aterroriza psicológicamente a los trabajadores para que no se incorporen a los sindicatos o gremios, a los cuales se vincula sistemáticamente con los insurgentes con el claro propósito de justificar la represión contra las organizaciones laborales.

El Ing. Duarte prometió incorporar a los diferentes sectores de la población en su gestión administrativa. La práctica ha demostrado lo contrario: desde el principio pidió la "renuncia" a todos aquellos que no le eran afectos a su gobierno; los diferentes sectores le han solicitado audiencias para exponerle sus problemas y se ha negado a escucharlos, ya no digamos a resolverlos; en la asamblea legislativa, ni siquiera ha atendido las sugerencias de los partidos de oposición; implementó el paquete económico sin tomar en cuenta las opiniones de los diferentes sectores del país; formalizó el pacto social con la UPD y no cumplió los compromisos contraídos en dicho pacto, por el contrario, ha asumido una

actitud de confrontación con las organizaciones firmantes; ha pretendido destruir las organizaciones que lo llevaron al poder a través del "pacto social," ante la imposibilidad de comprar a los dirigentes honestos y fieles a los trabajadores; conjuntamente con el IADSL mantiene una constante campaña de división de las organizaciones sindicales, gremiales y cooperativas que no simpatizan con sus planes maquiavélicos.

La reactivación económica, al igual que los aspectos antes mencionados, ha sido sólo un discurso vacío, ya que el gobierno demócrata cristiano no ha podido sacar al país adelante. En este campo, lejos de mejorar las condiciones económicas, éstas se han empeorado, traducándose en una crisis nunca vista en nuestro país. Basta hacer mención de algunos elementos de la economía y nos damos cuenta de la verdadera realidad; según cifras oficiales, la producción agrícola decreció en una tasa del 2.4 por ciento, aunque fuentes ligadas a este rubro de la economía ponen en duda estas cifras; afirmando que la merma en la producción fue mucho mayor; sólo en 1985 se pueden citar las siguientes fábricas cerradas: Texas Instruments, El León, Industrias Priscila, Ortega Hermanos, Suministros y Alimentos S.A. etc., con lo cual se ha elevado el índice de desempleo; el producto interno bruto per cápita ha descendido de 580 colones en 1983 a 558 en 1985; el poder adquisitivo del colón descendió de 0.487 en mayo de 1984 a 0.349 en diciembre de 1985; la deuda externa se ha incrementado de 1.890.5 millones de dólares en 1983 a 2.035.1 millones de dólares en 1985 (*Coyuntura económica*, No. 4).

Las reformas económicas iniciadas en 1980 no han resuelto los problemas económicos y sociales del pueblo, no por las reformas en sí mismas, sino porque fueron concebidas como un proyecto político, mediante el cual se pretendían dos objetivos fundamentales: detener el avance de la organización y lucha de los sectores populares y ganar la confianza del pueblo para que fuera a votar en las elecciones, haciéndolo creer que las reformas iban a ser profundas y que con eso se iban a mejorar las condiciones de vida. Seis años después de iniciadas las reformas, la realidad nos dice que éstas sólo fueron un engaño, ya que la situación económica y social del pueblo es peor que antes. Una revisión de la situación de estas reformas nos muestra lo siguiente.

La reforma agraria no ha dado los frutos esperados en beneficio de la población campesina y la población en general. A pesar de que el Ing. Duarte al asumir el poder como presidente se comprometió a consolidar la primera fase y a realizar la segunda, la realidad nos ha demostrado que no ha habido ningún interés por cumplir los ofrecimientos, pues las cooperativas carecen de un financiamiento adecuado y de un mercado justo para su producción, razón por la cual las condiciones socio-económicas de los beneficiarios no han tenido ningún mejoramiento. Además de que las cooperativas han carecido de una real y adecuada asistencia técnica, han sido manipuladas por el gobierno que ha pretendido mantenerlas como su base social. En un intento desesperado por querer demostrar que está haciendo algo por la reforma agraria, el presidente Duarte ha establecido medidas como rebajar los intereses sobre el valor de las tierras del 9.5 al 6 por ciento anual; ampliar el período para el pago de la deuda agraria de 30 a 50 años, y ampliar el período de gracia hasta 5 años.

En evaluaciones realizadas por el gobierno y los organismos internacionales se ha comprobado técnicamente que la mayoría de las cooperativas no tienen capacidad para pagar la deuda, en tal sentido, estas medidas no representan ninguna solución ya que para esas cooperativas, la solución es no pagar la deuda.

La debilidad principal de la reforma agraria por parte del gobierno es que no ha tenido ni la voluntad ni la capacidad para ejecutar la segunda etapa contemplada en la Ley Básica de Reforma Agraria de 1980, lo cual contrasta con su propaganda sobre las reformas.

Es importante hacer notar que el gobierno de Duarte ni siquiera se ha atrevido a entregar a los campesinos las áreas de tierra que sobrepasan a la cantidad de 245 hectáreas, establecidas por la constitución política, según la cual esas tierras tendrían que entregarse a los campesinos antes de diciembre de 1986. Esto nos demuestra que al presidente Duarte cuando no le conviene, le importa poco cumplir la constitución política del país.

El fracaso de la nacionalización bancaria se demuestra en que el acceso a los créditos y las condiciones crediticias para los campesinos y los pequeños empresarios en vez de mejorar, han empeorado; los intereses de los créditos han sido aumentados año tras año; los problemas para la



obtención de créditos son peor que antes; y en el caso de las cooperativas, muchos créditos han sido y siguen siendo negados.

Mediante la nacionalización del comercio exterior, el gobierno prometió favorecer a los estratos más pobres de la población. La práctica ha demostrado que el gobierno ha logrado captar más divisas, pero para financiar la guerra y no para resolver las necesidades básicas de la población.

3. El "Programa de estabilización y reactivación económica" (paquetazo) y sus efectos sobre la población

Como consecuencia del conflicto socio-político que vivimos en la actualidad y por el empeño del gobierno de Estados Unidos en mantener y profundizar la guerra en nuestro país, el gobierno demócrata cristiano salvadoreño, estableció el 22 de enero de 1986 el "Programa de estabilización y reactivación económica," cuyo objetivo principal es el de obligar a la población salvadoreña a financiar una guerra que no quiere, porque ello significa su propia destrucción.

Al hacer un análisis de las medidas concretas que contempla este paquete, reafirmamos que no se persigue estabilizar ni reactivar nuestra economía, como el gobierno nos quiere hacer creer, sino únicamente la profundización del conflicto socio-político a costa del hambre y la miseria de la población salvadoreña.

La devaluación del cólon ha causado la elevación de los precios en los diferentes rubros: los precios de los insumos agrícolas se incrementaron en un 83.8 por ciento respecto a la temporada 1985-1986; los precios de los combustibles en

un 46.6 por ciento respecto a enero de 1986; los precios de las medicinas, en un promedio superior al 150 por ciento; los precios de los materiales de construcción, en un promedio superior 100 por ciento; los pasajes en el transporte colectivo, en un 20 por ciento; los precios de los artículos, bienes y servicios de primera necesidad, en un promedio superior al 60 por ciento.

Específicamente, el paquete ha afectado a la población en la forma siguiente. El programa contempla un aparente aumento a los salarios, aumento que no es más que un engaño a los trabajadores, por las siguientes razones: si un obrero agrícola antes ganaba 5.20 colones por día, tenía un salario equivalente a 2.08 dólares mientras que ahora, con un aumento de 2.80 colones por día, su salario ha bajado a 1.60 dólares; un trabajador de la industria o del comercio que antes ganaba 390 colones al mes, tenía un salario equivalente a 156 dólares, mientras que ahora con un aumento de 60 colones por mes, sólo gana el equivalente a 90 dólares con lo cual pierde 66 dólares en sus ingresos. Esta es la situación de la gente que tiene trabajo permanente, la cual según datos estadísticos es un 20 ó 25 por ciento de la población económicamente activa. Por otra parte el gobierno nunca ha sido capaz de garantizar que el pago de los salarios en el campo se cumpla a cabalidad.

El gobierno planteó que controlaría los precios de los productos básicos; sin embargo, en lo concreto, los precios se elevan a tal grado que en pocos días será imposible obtener lo básico para nuestra subsistencia. El análisis de las medidas nos muestra lo siguiente. Según datos de la Universidad de El Salvador, el costo de la canasta básica antes del paquete para una familia de 5

personas era de 1.710 colones al mes. Si tomamos en cuenta que el 84.62 por ciento de los trabajadores públicos tienen un salario menor a los 1.000 colones tenemos entonces un déficit de 719 colones en el caso de los que ganan 1.000 colones, pero la mayoría de los trabajadores ganan un promedio de 700 al mes con lo cual sufren un déficit de 1.019 colones mensuales. En el caso de los trabajadores agropecuarios, el costo de la canasta básica para una familia de 7 personas, calculado conservadoramente, es de unos 1.000 colones mensuales. Si su salario es de 8 colones diarios o sea 240 colones mensuales, significa que una familia campesina tiene un déficit de 760 colones mensuales. Por otra parte, a pocos días de haber implantado el programa gubernamental, el precio del aceite vegetal subió de 12.15 a 15 colones la garrafa de un galón; la harina suave de 47.25 a 65 colones el quintal, la harina fuerte de 48.75 a 70 colones quintal y lo mismo ocurrió con muchos bienes más.

La producción agropecuaria de los campesinos, pequeños y medianos agricultores y cooperativas, que casi siempre se dedica a la siembra de granos básicos ha sido gravemente afectada. La relación costos de producción versus ingresos de producción presenta un grave desnivel, pues los costos de producción se han elevado en más de un 100 por ciento y los precios de la producción sólo han sufrido un incremento de un 38 por ciento, es decir, el campesino sufre una disminución de un 62 por ciento en sus ingresos.

La tasa de desempleo que ya era de un 40 por ciento antes del paquete, ha sufrido un incremento acelerado a consecuencia del mismo. Por otra parte, si tomamos en cuenta que la producción agrícola sufrirá una disminución en el presente año a consecuencia del incremento en los costos de producción, podemos prever que el empleo se verá disminuido mucho más.

La educación ha sido y será aún muy afectada, pues los costos de útiles, uniformes, transporte, etc., han sufrido aumentos que la población no está en capacidad de cubrir, lo cual marginará aún más a miles de salvadoreños con respecto a la educación y se incrementará la tasa de analfabetismo.

Según datos del gobierno, el 65 por ciento de la población salvadoreña vive hacinada en viviendas construidas fuera del marco formal, financiero e institucional, viviendas que carecen de los servicios básicos y muchas de ellas se en-

cuentran en condiciones de extrema promiscuidad y pobreza. De acuerdo a datos del mismo gobierno, el déficit habitacional actual es de más de 600 mil viviendas, de las cuales 190 mil corresponden al área urbana y 425 mil al área rural.

Con la implantación del paquete, la vivienda será muy afectada principalmente por los incrementos de los precios de los materiales de construcción como el hierro, el cemento, el ladrillo, los altos intereses de los créditos y los terrenos que ahora tendrán un valor más elevado que antes.

4. El conflicto socio-político y sus consecuencias para el país

El conflicto armado que vivimos desde hace 6 largos años ha sumido al país en una profunda crisis económica, social y política, causando grandes pérdidas humanas y materiales. Más de 60.000 salvadoreños muertos víctimas del conflicto. Más de 1.250.000 desplazados y refugiados en el país y en otros países. Miles de trabajadores capturados y desaparecidos. Miles de heridos de guerra, en su mayoría jóvenes y adolescentes campesinos, muchos de los cuales han quedado inválidos para toda su vida. Millones de colones en pérdidas materiales. Más de 5.000 millones de colones en endeudamiento externo que han comprometido en un mayor grado nuestra soberanía nacional. Más de 1.900 escuelas y unas 187 empresas cerradas.

El conflicto que ahora nos ocupa ha dividido a la sociedad salvadoreña en dos grandes polos que constituyen en la actualidad dos grandes fuerzas. Así tenemos las fuerzas gubernamentales que han perdido el control en una gran parte del territorio nacional y las fuerzas insurgentes que ejercen control en el territorio no controlado por el gobierno.

La población salvadoreña y los diversos pueblos del mundo no desconocen que uno de los principales factores que inciden en el presente conflicto es el gobierno de Estados Unidos, el cual desde 1980 participa determinadamente en el mantenimiento y agravamiento del mismo. El conflicto se mantiene a costa de la ayuda militar de ese gobierno, con lo cual los únicos favorecidos son los grandes fabricantes de armas de Estados Unidos quienes tienen mercado para su industria militar a costa de la destrucción de nuestros niños, de nuestras mujeres y en fin de

nuestra sociedad. La llamada "ayuda" persigue un interés que se concreta en el sometimiento de nuestro país a funcionar como colonia estadounidense, lo cual constituye una grave violación a nuestra soberanía y a nuestra independencia patria.

La guerra es el problema que más aflige al pueblo salvadoreño, ya que después de 6 largos años de vivir en constante zozobra, cada día que pasa, dicha guerra tiende a agravarse y profundizarse; tendencia que de continuar así podría regionalizar el conflicto y desembocar en la destrucción total de nuestro país y de la región centroamericana.

Ante la amenaza del agravamiento y regionalización del conflicto y en la búsqueda del camino hacia la paz, el pueblo salvadoreño y muchas instituciones y países han clamado la paz en El Salvador, pero ese clamor no ha tenido eco y ha sido callado con aviones, bombardeos, tanquetas y otras armas bélicas. No obstante el pueblo salvadoreño continúa luchando incansablemente hasta alcanzar sus anhelos de justicia, paz y democracia.

5. En torno a la propuesta de la tercera reunión de diálogo

Del discurso pronunciado por el Ing. Duarte el 1 de junio, con ocasión de celebrar sus 2 años de gobierno, la única noticia que ha generado expectativas en la población salvadoreña fue la decisión de realizar la tercera reunión de diálogo con el FMLN-FDR, en territorio salvadoreño en los últimos días del mes de julio o durante el mes de agosto del presente año. No es para menos, los distintos sectores de la población han expresado por los diferentes medios y en diversas ocasiones, la exigencia de continuar el diálogo como un mecanismo civilizado en la búsqueda de la paz.

La UNTS considera que reabrir esta posibilidad después de casi 2 años de haberse paralizado, es un paso eminentemente positivo que no debe abandonarse en lo sucesivo, bajo ningún pretexto. No obstante consideramos oportuno expresar nuestra preocupación porque el ofrecimiento de diálogo ha sido concebido como una nueva jugada propagandística, con el propósito de engañar a todos aquellos sectores que hemos venido demandando la continuación del diálogo o para reforzar la posición intervencionista del gobierno norteamericano en el área centroameri-

cana. Nuestra preocupación tiene su base en que el Ing. Duarte, tratando de ignorar las verdaderas causas que han dado origen a la guerra, a la vez que ofrece la tercera reunión de diálogo, plantea aspectos condicionantes que obstruyen de antemano las posibilidades de un relativo éxito: el diálogo se hará dentro del marco de la constitución política, sin armas y se hace para que el adversario se incorpore al proceso democrático de su gobierno.

Cuando se de una lucha entre dos adversarios, es de suponer que dialogan con el propósito de acercar posiciones, buscar coincidencias y tomar acuerdos sobre ellas, cuando el propósito es sincero y bien intencionado. En este caso, la propuesta del Ing. Duarte de mantener tales aspectos condicionantes, nos hace prever resultados que no son los que el pueblo espera. Y si los resultados no son positivos, el Ing. Duarte tendrá que lamentar aún más, la pérdida de credibilidad a su gobierno.

Considerando que somos los salvadoreños los que debemos resolver nuestros problemas y decidir nuestro propio destino; que la actual crisis económica, social y política no tiene ninguna posibilidad de solución mientras continúe la guerra y el gobierno de Estados Unidos continúe interviniendo en nuestros asuntos internos; que las causas que originaron el actual conflicto como son la desigual distribución de la riqueza, la marginación y la represión de los sectores populares, el desempleo y otras, aun persisten; que la implementación del Programa de Estabilización y Reactivación Económica, conocido popularmente como "paquete," ha agudizado la grave crisis económica de todos los salvadoreños al aumentar los precios de los artículos y servicios de uso y consumo popular; que nuestro país no puede continuar en el actual estado de crisis y de guerra en el que se encuentra porque ello nos llevaría a la deshumanización y a la destrucción de nuestra sociedad y, por lo tanto, el conflicto socio-político debe ser solucionado al más breve plazo; que el gobierno del Ing. José Napoleón Duarte ha mostrado que no tiene capacidad para solucionar los graves problemas del país y de los diferentes sectores de nuestra sociedad, especialmente en lo referente a empleo, alimentación, salud, vivienda y educación; que las reformas económicas implantadas en 1980 no han dado los resultados esperados en beneficio de la población; que nuestro país debe recuperar su independencia y soberanía nacional, proponemos derogar

las medidas del paquete económico que han perjudicado a los trabajadores y a toda la población, especialmente las que han causado incrementos en los precios de los artículos de consumo popular, los insumos agrícolas, los combustibles, las medicinas y los servicios públicos; ejecutar la segunda etapa de la reforma agraria en forma inmediata, para permitir la integración de todo el campesinado sin tierra al proceso productivo del país; exonerar a las cooperativas del sector reformado y no reformado del pago de la deuda agraria, ya que de lo contrario, las cooperativas únicamente trabajarán para pagar las deudas y sus intereses, lo cual obliga a sus asociados a vivir en condiciones de extrema pobreza y miseria. Los puntos anteriores deben complementarse con la creación de sistemas adecuados de financiamiento y comercialización de la producción, así mismo debe definirse un plan de asistencia técnica que permita la capacitación eficiente del campesino y, en consecuencia, elevar los niveles de producción y productividad a fin de garantizar la alimentación de nuestra población.

Establecer un plan de fomento y desarrollo industrial que fortalezca las empresas existentes, reactive las fábricas cerradas y propicie la creación de nuevas empresas asociativas, dirigidas y administradas por los trabajadores.

Reestructurar el sistema bancario poniéndolo al servicio de todos los sectores de nuestra sociedad, especialmente de los campesinos, las cooperativas, la pequeña y mediana empresa, a intereses razonables y en condiciones y requisitos flexibles.

En lo relacionado al comercio se deberá ampliar las relaciones comerciales con todos aquellos países que nos ofrezcan un trato justo y conveniente a los intereses nacionales y que nos paguen mejores precios por nuestros productos de exportación; crear un sistema de mercadeo interno que garantice el abastecimiento de los productos básicos a toda la población. Este sistema debe ser dirigido y administrado por el Estado y las organizaciones comunales existentes o que se creen para tal efecto; garantizar el congelamiento y control efectivo en los precios de los artículos y servicios de uso y consumo popular: vivienda, alimentos, medicinas, vestuario, educación, transporte y otros.

Decretar un aumento general de salarios en un porcentaje igual al incremento en el costo de la vida.

En relación al transporte público de pasajeros, se deben proporcionar nuevas unidades a las cooperativas y empresas de transportistas existentes, bajo condiciones favorables y proporcionar subsidios para no elevar el valor del pasaje y regular los precios de los repuestos y accesorios.

Garantizar la reapertura o creación de fuentes de trabajo a fin de proporcionar empleo a todos los trabajadores desocupados.

Equipar adecuadamente los centros de salud existentes y construir nuevos centros con equipos, medicina y personal suficiente a fin de atender las necesidades de toda la población, desarrollando simultáneamente, programas concretos de prevención de enfermedades y de higiene ambiental.

En el campo de la educación, se deben reabrir los centros educativos cerrados y construir nuevos, así como también, reconstruir y ampliar la Universidad Nacional, asignándoles a todos estos centros educativos, los recursos económicos, el equipo y el personal necesario a fin de que puedan atender a toda la población estudiantil.

Asimismo el gobierno debe ejecutar un programa real de alfabetización de adultos, que erradique el analfabetismo en nuestro país y sienta las bases para el desarrollo de nuestra propia cultura.

Ejecutar a través del IVU, FSV, e INPEP un amplio plan de construcción de viviendas a precios de costo y con estructura adecuada al crecimiento de la familia.

Proporcionar a la población desplazada y refugiada, que desee regresar a sus lugares de origen, o a los que deseen quedarse en cualquier otro lugar del país, los medios necesarios para que puedan reconstruir su modo de vida en condiciones justas y humanas.

Dar participación en el gobierno a todos los sectores económicos y políticos de nuestro país a fin de contribuir todos a la búsqueda de solución a la actual crisis del país; garantizar el pleno respeto de los derechos humanos, prioritariamente la libre organización sindical y gremial y la libertad de pensamiento; decretar una amnistía general para todas aquellas personas que se encuentren encarceladas por sus ideas políticas; derogar todos aquellos decretos que restringen los derechos económicos, sociales y políticos de la población; realizar una exhaustiva investigación

de los actos de corrupción y aplicar las medidas correspondientes a todas aquellas personas o funcionarios implicados en las mismas. No es justo que unos pocos inescrupulosos se apro-

vechen de los escasos recursos que le pertenecen a la población; e iniciar un proceso de recuperación de nuestra soberanía y nuestra independencia patria y no permitir más imposiciones del gobierno de Estados Unidos en nuestro país.

